

Las crisis post-transiciones en América Latina. Un análisis comparativo de los casos de Argentina y Venezuela

Hernán Fair

[herfair@hotmail.com]

Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO, Sede Argentina) y Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctorando en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Resumen

Tras la experiencia de sangrientas dictaduras militares, a partir de la década de los años 80 y comienzos de los 90, la mayoría de los países de América Latina ingresaron a una etapa de transición democrática. Este artículo indaga en el proceso de crisis post-transiciones en Latinoamérica, enfocando en un análisis comparativo, los casos de Argentina y Venezuela. A partir de un análisis diacrónico del sistema de partidos y del modelo de acumulación en ambos países, se considera que la crisis fue consecuencia de la ruptura del régimen político y de la aplicación de las políticas económicas neoliberales.

Palabras clave: Argentina. Venezuela. Sistema de partidos. Modelo de acumulación. Crisis.

Abstract

The post-transitions crisis in Latin America. A comparative analysis of the cases of Argentina and Venezuela

Before the experience of bloodies dictatorships, during the 80's and the beginning of '90's decade the Latin-American countries became to a democratic transition stage. This article studies the process of post transition crisis in Latin America focusing on a comparative analysis from the Argentinean and Venezuelan cases. Using a diachronic analysis from the system party and the model of accumulation economic in both countries, the study affirms that the crisis was consequence from the rupture of the politic regimen and the application of neoliberal economic politics.

Key words: Argentine. Venezuela. Party system. Model of accumulation. Crisis.

Introducción

Luego de haber pasado por la experiencia de sangrientas dictaduras militares, a partir de la década de los años 80 y comienzos de los 90, la mayoría de los países de América Latina ingresaron a una etapa de transición democrática,¹ sin embargo, esta nueva etapa no estuvo exenta de conflictos, que expresaban la difícil articulación entre el Estado y la sociedad civil en un contexto de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Tomando en cuenta este aspecto, el siguiente trabajo se propone realizar un análisis comparativo sobre la etapa de las post-transiciones y las crisis emergentes en Venezuela y Argentina. En efecto, consideramos que ambos países poseen características en común que los convierten en casos fuertemente comparables entre sí.

A diferencia de los enfoques neo-institucionalistas dominantes dentro del campo de la Ciencia Política, en los dos países seleccionados, las crisis post-transiciones no estuvieron asociadas a factores político-institucionales relacionados con el tipo de sistema presidencialista,² o a la ausencia de mecanismos de “accountability”.³ Las causas de su decadencia deben buscarse, en cambio, en la conjunción de la aplicación a mansalva de un conjunto de políticas económicas de orientación neoliberal⁴ que provocaron graves consecuencias, tanto económicas como sociales y, en segundo término, en la presencia de un régimen político caracterizado por altos niveles de corrupción e impunidad. Es decir, que lejos de responder unívocamente a una dimensión institucional, como la mayoría de estos trabajos plantean, desde una visión normativa y reduccionista que idealiza los casos europeos de “democracia liberal”,⁵ la crisis será también, y en mayor medida, consecuencia de las reformas económicas aplicadas en estos países.⁶

Para llevar a cabo el análisis, hemos seleccionado dos variables que consideramos claves: el sistema de partidos y el modelo de acumulación. La primera variable nos permitirá investigar, a partir de un análisis diacrónico, los factores que influyeron sobre la presencia de la crisis política-institucional y cómo se presentó en cada caso en particular. La segunda, por su parte, nos permitirá determinar el factor que contribuyó a la existencia de una crisis económica y social y verificar en qué medida se introdujo.

Breve anexo metodológico

Nuestra investigación corresponde, a un análisis de tipo comparativo, en el marco de lo que la Ciencia Política ha denominado: análisis de casos comparados. Como señala David Collier, la relevancia que adquiere la comparación de dos o más casos teóricos, radica en que “aguza nuestra capacidad de descripción y resulta ser un precioso estímulo para la formación de conceptos”.⁷ Este tipo de metodología basada en el estudio sistemático de un reducido número de casos, resulta el más adecuado para profundizar en el análisis teórico de las hipótesis planteadas, ya sea a través de la comparación de casos con características similares, o mediante la contrastación con casos rivales.⁸ En este trabajo nos centraremos en la primera de las posibilidades de estudio comparativo. Para ello, hemos seleccionado dos casos, el de Argentina y el de Venezuela, que encuentran interesantes similitudes, y algunas diferencias no menos relevantes, tanto en el ámbito político-institucional, como en el de implementación de políticas económicas. Estas similitudes, como veremos, nos permitirán dar cuenta de efectos sistémicos permanentes en algunos casos y

aspectos de variabilidad en otros, de acuerdo al grado de estructuración y desarrollo de cada una de las dos dimensiones seleccionadas.

Surgimiento del sistema de partidos

Introduciéndonos en primer lugar en el caso venezolano, debemos decir que en sus comienzos, durante el siglo XIX, era un país básicamente rural, “atrasado” y fragmentado regionalmente, lo que hacía que el Estado central tuviera un rol nominal. En cuanto a lo que pudiera llamarse “partidos políticos”, eran bandas armadas con marcadas bases regionales y lealtades caudillistas. Si bien, a partir del siglo XX, con la explotación y desarrollo de la industria petrolera, que sustituyó de cierta manera el modelo de acumulación centrado en la agricultura, reemplazado por un nuevo modelo nacional-popular, y se crearon Fuerzas Armadas nacionales, burocracias y sindicatos organizados, el país estaba regido por una dictadura militar que, bajo el mando del general Juan Vicente Gómez (1908-1935), no permitía la organización política.

No obstante, tras la tibia experiencia aperturista del gobierno del general Eleazar López Contreras, en septiembre de 1941, a partir de la liberalización que llevó a cabo el general Isaías Medina Angarita, que facilitó la organización sindical y política, fue establecido el primer partido íntegramente nacional,⁹ llamado Acción Democrática (AD).¹⁰ Los líderes y activistas de AD inmediatamente se dedicaron a construir una estructura política desconocida hasta el momento en Venezuela, esto es, un partido que fuera permanente, presente en todos los niveles de la vida local y nacional, y capaz de integrar muchos intereses y grupos divergentes en su vida organizativa.¹¹

La base social del partido, que Di Tella ha denominado como “populista de clase media” o “aprista”,¹² (en relación al Partido Aprista Peruano), estaba compuesta por un núcleo policlasista conformado por sindicatos y masas populares urbanas, campesinos y sectores de clase media, principalmente organizaciones de maestros y asociaciones de estudiantes y de profesionales.¹³ Todos estos grupos, especialmente los sectores medios, que constituían la fracción predominante, fueron integrados dentro del partido, con lealtades sectoriales y partidarias e identidades fuertemente conectadas.

En este sentido, AD incorporó intereses sociales emergentes, dándole a sectores, como los obreros, estudiantes, profesionales o campesinos un lugar en el proyecto de organización del partido.¹⁴ Sin embargo, las organizaciones, no tenían poder político, las elecciones eran indirectas y el sufragio limitado. Precisamente para cambiar esas reglas, los líderes del partido, liderados por Rómulo Betancourt, se unieron a jóvenes militares en la victoriosa conspiración de 1945 contra el gobierno del general Medina Angarita.

Los siguientes tres años, conocidos como el “Trienio” (1945-1948), marcaron, al igual que lo harían en Argentina, la introducción definitiva de la política de masas en la vida nacional. Las barreras a la participación fueron disminuidas, se impuso el sufragio universal y se establecieron elecciones directas en todos los niveles de gobierno. Organizaciones de todo tipo fueron estimuladas y crecieron rápidamente, especialmente los grupos obreros y campesinos. Además, servicios como la educación, salud, agua y comunicaciones, fueron extendidos por primera vez a los sectores pobres.

Por otro lado, fueron creados nuevos partidos. El más importante de ellos fue el Comité Organizativo Político Electoral Independiente, (COPEI), seguido por Unión Republicana Democrática (URD), partido formado por anticomunistas de izquierda que habían apoyado anteriormente al General Medina Angarita.¹⁵

A pesar de que se expandió la participación y los beneficios concedidos fortalecieron al partido enormemente, también creció la oposición de los sectores de la elite que temían que el nuevo régimen, controlado por las organizaciones populares, destruyese completamente el orden social existente. La oposición de derecha, representada por la Iglesia católica, fue ocupada por COPEI, los sectores militares conservadores, los empresarios y la Embajada de los Estados Unidos. Finalmente, el 24 de noviembre de 1948, un Golpe militar, liderado por el General Marcos Pérez Jiménez, puso fin a la breve experiencia de democratización política, económica y social iniciada por Betancourt.

El nuevo régimen, al igual que ocurriría en Argentina con el peronismo a partir del Golpe de Estado de 1955, eliminó a AD, que pasó temporalmente a la clandestinidad. Además, terminó con las reformas educativas, agrarias y laborales y pactó con el resto de la oposición política a través de una combinación de sobornos, fraude y violencia. Sin embargo, la fuerza de la oposición a la dictadura, obligó a Pérez Jiménez a llamar a un plebiscito en diciembre de 1957. El afrontamiento del plebiscito ayudó a unificar a la oposición que, bajo el nombre de Junta Patriótica, logró que el régimen colapsara el 23 de enero de 1958.¹⁶

Los acontecimientos de esta fecha, marcaron no sólo el restablecimiento del régimen democrático, sino también, y más importante aun, la creación de un tipo de democracia más resistente. Ello se debió a que los líderes de la clase política, vieron en esta fase, la oportunidad de corregir los errores que se habían cometido durante el Trienio, que estaban relacionados con una creciente polarización política, un sentido de conflicto incontrolable y la marginalización que habían hecho de los sectores de poder minoritarios.

En el caso argentino, el surgimiento del sistema de partidos se remonta a finales del siglo XIX. Para entonces, la política se encontraba dominada por un partido de notables (el “Unicato”), formado por un conjunto de gobernadores de provincias que, bajo el nombre de Partido Autonomista Nacional (PAN), apelaban al fraude electoral y al clientelismo político para legitimarse.¹⁷ En 1890, como consecuencia de la llamada Revolución del Parque,¹⁸ surgió el Partido Unión Cívica Radical (UCR), partido cuyo discurso se centraba en el aspecto ético y moral, en franca oposición al fraude electoral del régimen conservador dominante.

Al igual que en Venezuela, a mediados de la década de los años 40, la presión de las masas, que exigían una mayor participación social, permitió el ascenso de un líder personalista que incorporó a los sectores marginales dentro del sistema político. Del mismo modo que Betancourt en el país andino, que había llegado al poder mediante un golpe cívico-militar para luego “democratizarse”, en Argentina, también se dará la paradoja del gobierno de otorgar la ciudadanía social a partir del acceso al poder mediante una vía anti-democrática, en el sentido liberal del término. En efecto, el coronel Juan Domingo Perón, había ingresado a la política como integrante del Grupo de Oficiales Unidos (GOU), militares nacionalistas que llevarán a cabo un golpe de Estado en junio

de 1943. El líder, que formaba parte del gobierno como Secretario de Guerra y luego ocuparía el cargo de Vicepresidente, llevará a cabo una alianza con los sectores asalariados de la industria nacional y el sindicalismo, brindando amplios beneficios sociales a los trabajadores sindicalizados. Estas políticas benefactoras serán vistas por el gobierno como un exceso desmedido hacia las masas que podría terminar poniendo en peligro al propio régimen, por lo que Perón fue obligado a renunciar. Poco después, el 17 de octubre de 1945, se llevó a cabo una manifestación popular masiva en la Plaza de Mayo, en reclamo de su inmediata liberación. Nació a partir de allí el mito del peronismo.

Pero las coincidencias no terminarían allí. En efecto, si Perón había logrado su momento culminante el 17 de octubre de 1945, resultando electo ampliamente en las elecciones celebradas al año siguiente a partir de la creación del Partido Peronista, luego Partido Justicialista (PJ),¹⁹ en Venezuela, justo un día después de la movilización popular aclamando a Perón, el 18 de octubre de 1945, el mismo apoyo popular que el líder argentino, lo obtuvo el líder nacional-popular Rómulo Betancourt -creador de Acción Democrática (AD)- en el golpe cívico militar que le permitió acceder al poder. Pero lo más relevante será que ambos partidos le otorgarán entidad por primera vez en la historia a los sectores populares marginados por los grupos tradicionalmente en el poder, al incorporarlos al escenario político.²⁰ En ese contexto, durante sus tres mandatos presidenciales (1946-1955 y 1973-1974), el gobierno de Perón aplicó fuertes políticas intervencionistas de carácter distribucionista y mercado-internistas, garantizando el pleno empleo, altos salarios y acceso a servicios sociales a amplios sectores hasta entonces excluidos del sistema. En Venezuela, por su parte, se llevaron a cabo también profundas transformaciones económicas y sociales, aunque el grado de industrialización fue relativamente menor al argentino.

No obstante, existieron también algunas diferencias entre los dos países. Si bien ambos se caracterizaron por la presencia de un líder carismático que incorporó política y sobre todo socialmente a las masas a partir de un proyecto nacional y popular ligado al mercado interno, y en ambos casos fue el Estado el que creó a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales “desde arriba”, en Argentina se constituyó una relación orgánica que dividió al partidomovimiento en 3 ramas (sindical, femenina y partidaria),²¹ excluyendo a los campesinos, muy minoritarios en ese país, y también a los estudiantes, mayoritariamente antiperonistas.

En Argentina, el peronismo casi no obtuvo apoyos de los sectores medios, lo que ha llevado a Di Tella a caracterizarlo como “partido populista obrero”,²² si bien, Perón era de origen militar, tampoco pensó en incorporar corporativamente a los pocos militares y estudiantes que lo apoyaban. Sí, en cambio, obtendría el respaldo de algunos sectores conservadores y clases altas, cuestión que llegaría a su apogeo a partir de los años 90, con la llegada al poder de Menem. En el caso de Venezuela, en cambio, los sectores medios serán mayoritarios, al igual que los estudiantes, la clase obrera y el campesinado, es decir, los “estamentos sociales que no disfrutaban de los privilegios del poder y la riqueza”, según rezaba el programa oficial del partido, tendrán asignado un rol central, siendo los sectores altos muy minoritarios. Por otra parte, debemos considerar que Perón logra estar en el poder diez años consecutivos, siendo nuevamente electo casi dos décadas después para estar en el poder diez años más. En el caso de Venezuela, en cambio, el liderazgo de Rómulo Betancourt se acabará muy pronto, en 1947,²³ siendo reemplazado en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año, por Rómulo Gallegos,

adepto también al partido AD, venciendo ampliamente a la oposición. Poco después, llegaría la debacle y el golpe de Estado de 1948, que interrumpiría el proyecto democrático-modernizador, llevado a cabo por el partido Acción Democrática.

Características del sistema de partidos

Desde su creación, en la década de 1940, y hasta la crisis de 1989, los partidos políticos siempre estuvieron en el centro de la democracia venezolana moderna. Según Kornblith y Levine, los partidos formaban un verdadero sistema que tenía las siguientes características: 1) eran las herramientas básicas de movilización política y acción, 2) la movilización aseguraba consenso y votos, características de los partidos modernos, 3) estos elementos se volvían centrales para legitimar las políticas y 4) como los partidos dominaban las políticas, eran el principal agente para la organización y canalización de los conflictos políticos.²⁴

Si nos retrotraemos a la transición a la democracia, a partir de 1958, podemos observar que la misma, fue construida a partir de amplias coaliciones y compromisos. En gran parte debido a la escasa polarización ideológica entre los dos partidos dominantes, producto de la bonanza producida por la explotación petrolera, no sólo los partidos políticos cooperaron entre sí, también los empresarios y profesionales se unieron, al igual que los militares y las organizaciones populares. En este sentido, podemos hablar de un “aprendizaje político”,²⁵ como lo señala Aznar, por parte de la sociedad en general, y de los sectores dirigentes en particular luego de la experiencia golpista.

Antes de las elecciones presidenciales de 1958, año en el que regresó la democracia, luego de diez años de dictadura con Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), los mayores partidos no comunistas -AD, COPEI y URD (desaparecido a finales de los años 70)- firmaron dos acuerdos formales de extrema importancia. El primero, conocido como Pacto de Punto Fijo, implicaba aceptar sin protestar, el resultado de las elecciones, el mantenimiento de una tregua política despersonalizando el debate y reforzando la consulta entre partidos sobre diferentes temas, y el compartir responsabilidades políticas y patronazgo.²⁶ Asimismo, hubo un segundo acuerdo formal: el Programa Mínimo de Gobierno. Este programa presentaba un modelo de desarrollo basado en el capital privado local y extranjero (principalmente para las industrias clave del hierro y el petróleo), subsidios al sector privado, principios de compensación para cualquier reforma agraria y la propuesta para realizar algunas reformas económicas y sociales.

Los acuerdos buscaban, al mismo tiempo, calmar a la oposición. Por este motivo, los militares fueron amnistiados, tuvieron mejor equipamiento y les aumentaron el salario. En cuanto a la Iglesia Católica, se le otorgó un status legal, subsidios públicos, consulta en la reforma educacional y cierta tranquilidad debido a la participación de COPEI en la coalición de gobierno después de 1958. Además, la opción antidemocrática, tanto de izquierda como de derecha fue vencida, la primera a través de la marginalización de la guerrilla. La segunda, mediante la realización de purgas exitosas en los cuerpos de oficiales que habían apoyado el golpe, la amnistía a los sublevados y el incremento de los salarios y equipamiento del sector militar.

Tanto AD como COPEI tenían varios puntos en común, ambos estaban compuestos por líderes profesionales, organizados alrededor de los distritos de la nación entera y en todos los niveles, y ambos incorporaban en su organización grupos funcionales, como sindicatos y estudiantes. Los dos partidos tenían la habilidad de movilizar importantes recursos financieros (producto en gran medida de la renta petrolera), no sólo para los gastos de gobierno, sino también para cultivar vínculos con los empresarios y los sectores financieros. COPEI, que nació como oposición al “Trienio”, -nombre con el que se conocieron los tres primeros años de gobierno de Rómulo Betancourt (1945-1948)- inicialmente concentraba sus votantes en los estados tradicionalmente católicos, pero luego fue convirtiéndose en un verdadero partido no confesional que competía en todos los niveles.²⁷ En cuanto a su ideología, era un partido “centrista de clase media” y moderado ideológicamente. En este sentido, se asemeja al Partido Radical de Argentina. Al partido AD, lo podemos considerar como “populista de clase media”. Este partido se caracteriza por ser policlasista, con bases en la clase media de modesta condición, con la inclusión de intelectuales, clase obrera y campesinos.

Si bien, con el retorno de la democracia había 3 partidos que competían electoralmente para Presidente -AD, COPEI y URD-, y que de ese número se pasó a 23 partidos en 1988,²⁸ en cada elección sucesiva siempre continuaron triunfando los dos partidos tradicionales. Algunas de las claves que explicaban el bipartidismo, eran el trabajo organizacional fuerte y una efectiva campaña mediática, posible a partir del financiamiento monetario. Otro factor clave era la disminución de la distancia ideológica a partir del corrimiento de ambos hacia el centro del espectro ideológico,²⁹ Esto posibilitaba la inclusión de sectores con intereses diversos.

La década posterior a 1958, mostró un firme declinamiento de AD y un ininterrumpido crecimiento de COPEI, pues luego de los mandatos de Rómulo Betancourt (1959-1964) y Raúl Leoni (1964-1969), ambos de AD, en la elección de 1969 fue electo por primera vez como Presidente constitucional, un candidato de COPEI, Rafael Caldera (1969-1973). Este hecho marcó el comienzo del péndulo bipartidista, que, a partir de 1973, adquirió características estructurales, al concentrar, entre ambos partidos, más del 85% del total de votos en cada elección presidencial.³⁰

Sin embargo, tras diversas experiencias compartidas,³¹ el péndulo se rompió en las elecciones de diciembre de 1988 con el triunfo, por segunda vez consecutiva, de un candidato de AD -Carlos Andrés Pérez- quien reemplazó en el gobierno, a un hombre de su mismo partido, Jaime Lusinchi (1984-1988). A partir de ese momento, el rol tan importante de los partidos políticos comenzó a ser cuestionado y desafiado gestándose entre los dos grandes partidos una lógica schmitteana amigo-enemigo, más cercana, como veremos, a la tradición argentina.³² De esta manera, cuando AD estaba en el poder, aumentaban las huelgas de los sindicatos ligados a COPEI, y cuando accedía al poder este partido, se acababan esas huelgas y comenzaban las de los sindicatos que respondían a AD.

Si nos centramos ahora en el caso argentino, podemos observar importantes diferencias en la configuración del sistema de partidos en relación con el país andino. A diferencia del caso venezolano, basado en una escasa polarización política entre los dos partidos mayoritarios y una lógica de cooperación y compromiso institucional entre ambos partidos hegemónicos, en

Argentina el bipartidismo, y el propio sistema de partidos, funcionó históricamente de manera imperfecta. Lejos de formarse una democracia institucionalizada, como ocurrió particularmente en países como Chile, Colombia y Uruguay, a lo largo de su historia, el sistema político argentino se caracterizó por la presencia de liderazgos movimientistas, como los de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en la Unión Cívica Radical (UCR) y Juan Domingo Perón en el Partido Justicialista (PJ), que rechazaron las prácticas de concertación pluralista con la oposición, a la que acusaban de ser el “Régimen”, el “AntiPueblo” o la “AntiPatria”.³³

Del mismo modo, lejos de acordar formalmente con las corporaciones militares, sindicales y empresariales, como vimos que ocurrirá en Venezuela a partir de 1958, en Argentina el retorno de la democracia, en 1983, no impidió la presión corporativa de cada uno de estos sectores. Así, mientras en Venezuela se pactaban acuerdos con cada una de las corporaciones, limitando los conflictos, en Argentina el presidente electo, Raúl Alfonsín (1983), deberá lidiar con varios intentos militares de golpe de Estado en su intención de juzgar a oficiales medios acusados de “terrorismo de Estado” durante la época del Proceso (1976-1983). También, tendrá que soportar fuertes conflictos sindicales desde el peronismo opositor, nucleado en la CGT liderada por el sindicalista Saúl Ubaldini, quien le hará 13 paros en sólo 6 años y la sistemática oposición en el Congreso por parte del PJ, que rechazará muchas de sus políticas públicas. Finalmente, el presidente tendrá en contra a la mayoría de los grandes empresarios, entre ellos los sectores agroexportadores, los acreedores y una parte del sector concentrado industrial, quienes terminarán por promover su caída mediante un “golpe de mercado” en 1989.³⁴

Debido al fracasado intento de democratizar al sistema político con el regreso del radicalismo al poder de la mano de Raúl Alfonsín (1983-1989), las prácticas hegemónicas y “delegativas”,³⁵ continuarían y se expandirían con el ascenso del dirigente justicialista Carlos Menem (1989-1999), en julio de 1989, ahora concentradas en la aplicación abusiva de decretos de necesidad y urgencia y vetos legislativos. En ese contexto, a diferencia de casos como el de Venezuela hasta la ruptura bipartidista, Chile, Uruguay y Colombia, caracterizados por partidos que históricamente tendieron a reconocer la pertinencia legítima de los adversarios políticos, el caso argentino no tendrá fuertes experiencias de concertación y diálogo interpartidario, limitándose a dirimirse las disputas mediante sucesivos golpes de Estado, promovidos por los grandes empresarios, tales como los que se producirían cíclicamente en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1970 y 1976 y proscripciones varias, como las sufridas por el peronismo entre 1955 y 1973 y por el radicalismo entre 1930 y 1943.³⁶

Crisis y fractura del sistema de partidos

Dijimos anteriormente que el golpe de Estado de 1948 contra AD terminaría con la experiencia del Trienio adeco, pero que, tras diez años de dictadura militar, desde 1958 la democracia en Venezuela parecía estar definitivamente consolidada. La dinámica se expresaba hasta entonces en una lógica de conciliación de clases a través del péndulo bipartidista entre la social democracia de Acción Democrática y el social cristianismo de COPEI. Pero su eficacia se agotaría a finales de los años 80, producto de la implementación de políticas de orientación neoliberal, altos niveles de corrupción y una manifiesta pérdida de legitimidad de los sectores dirigentes.³⁷ El primer acontecimiento que repercutiría negativamente sobre el bipartidismo, fueron los disturbios y

saqueos del 27 y 28 de febrero de 1989, bautizados como el “Caracazo”, que se iniciaron como protesta contra el incremento en el precio de la nafta y, por lo tanto, del transporte, que había implementado el presidente Carlos Andrés Pérez.³⁸

El segundo acontecimiento se remonta al 4 de febrero de 1992, cuando el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, encabezó un intento de golpe de Estado, que fracasó rápidamente. En el mismo intervinieron oficiales jóvenes de ideología nacionalista con un discurso populista y fuertemente antipartidos. Este intento de golpe, también obtuvo el apoyo, de algunos sectores de la derecha intelectual, que centraban sus críticas en el sistema de partidos y en la corrupción de la “clase política” y, por otro lado, de algunos sectores de izquierda que apoyaban la ideología progresista, popular y antiimperialista de los golpistas. Al mismo tiempo, lograría el respaldo de algunos sectores extra-institucionales desencantados con los partidos tradicionales que buscaban una organización alternativa, entre ellos cooperativas, ONG’s, juntas vecinales, sindicatos independientes.

A pesar de su fracaso, y de la misma manera que el Caracazo, la intentona golpista dejaría profundas marcas en la sociedad, incrementando la distancia hacia los partidos tradicionales, asimismo, ayudaría a desprestigiar a los partidos el juicio político realizado al presidente Carlos Andrés Pérez, quien sería acusado de mal uso de los fondos y destituido finalmente por el Congreso en 1993. En ese mismo año, Rafael Caldera, con un discurso fuertemente antipartidos, formó el movimiento Convergencia -no pudo obtener el apoyo de su partido COPEI- y, apoyado sorprendentemente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), logró llegar a la presidencia con el 30,5% de los votos.³⁹

Para las elecciones de 1998 la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales era muy grande. En ese contexto, el discurso crítico y profundamente antipartidos de Chávez, que había sido indultado por el presidente Caldera poco antes, caló hondo. El ex militar golpista, defensor de una posición nacionalista y popular, creó el partido Movimiento Quinta República (MVR) y llevó a cabo una amplia política de alianzas hacia la centro-izquierda que incluía a Causa R -aunque un sector luego se desprendió del partido y formó el Partido Patria para Todos, con partidarios pro y anti Chávez-, PCV, MAS -ambos partidos también con sectores de oposición a Chávez, principalmente los miembros de más edad- y el MEP-, y fue observando cómo sus índices de apoyo comenzaban a aumentar sistemáticamente a medida que se acercaba la fecha de las elecciones. La oposición, por su parte, se encolumnó detrás de la candidatura del empresario Salas Romer quien, al frente del movimiento Proyecto Venezuela (MPV), exhibía índices de intención de votos para presidente, superiores a los de los propios candidatos de COPEI y AD. Finalmente, en diciembre de 1998 Chávez llegó al poder con el apoyo del 56,2% de los sufragios, principalmente de sectores populares y medios desencantados con AD y COPEI, además de sectores minoritarios de la clase media-alta, como los industriales y petroleros, y algunos sindicatos no partidarios de AD, que lo habían acompañado en su intentona golpista del 4 de febrero.

A finales de febrero de 1989 se produjeron los disturbios populares conocidos como El Caracazo, mostrando la incapacidad de los partidos políticos tradicionales, de encauzar el descontento de la ciudadanía por las vías institucionales. Ese descontento se debía, en primer lugar, a la aplicación

de medidas neoliberales por parte del presidente Carlos Andrés Pérez -tema que analizaremos más adelante-. Pero la crisis no era sólo económica, sino que había otro gran factor que contribuiría a la crítica y al desencanto del sistema político: la incipiente corrupción del sistema de partidos en general y del Poder Judicial en particular, que llevaría incluso, como dijimos, a desarrollar un inédito juicio político y luego a deponer mediante éste, al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos.

Las elecciones para gobernadores de estado, llevadas a cabo en diciembre de ese mismo año, que por primera vez se hicieron mediante voto directo, a pesar de que mostraron un debilitamiento de los partidos tradicionales y un aumento del apoyo a los partidos de izquierda venezolana, -principalmente Causa R y el MAS- parecían volver las cosas a la normalidad. Pero la calma volvió a ser tormenta, ya que la conflictividad afloró a nivel intra e interpartidario. En el marco intrapartidario, parte de la dirigencia que se había opuesto en su momento a la candidatura de Pérez, le restaba apoyo a las políticas económicas ortodoxas del presidente.⁴⁰ En este marco, los dirigentes de la oposición comenzaron a poner en cuestión la propia legitimidad presidencial.

Como observamos, otro episodio que dejó su marca, erosionando al sistema, fue el intento de golpe de Estado de 1992 del coronel Hugo Chávez, que contó con el respaldo de una parte importante de la ciudadanía que se hallaba desencantada con los partidos tradicionales. Pero fueron las elecciones de gobernadores de fines de ese mismo año, que mostraron la pérdida del control por parte de AD en varios estados, lo que evidenció el desestructuramiento del bipartidismo, en los sectores regionales.

Finalmente, en un contexto de fuerte crisis en el régimen, se dio el marco propicio para el triunfo del líder carismático Chávez Frías, en diciembre de 1998, acompañado por un discurso netamente antipartidos, producto de la crisis de legitimación de la “clase política” tradicional, y de raíz populista-nacionalista, con fuertes críticas a los planes de ajuste neoclásicos defendidos por las elites nacionales y los organismos multilaterales de crédito, como una respuesta a la crisis económica. De esta manera, intentó poner fin, al bipartidismo tradicional.

En lo que respecta al caso argentino, a diferencia del venezolano, el bipartidismo funcionó históricamente, como ya lo hemos referido manera imperfecta. El sistema político se caracterizó por la presencia de liderazgos movimientistas, como los de Hipólito Yrigoyen en la UCR (1916-1922 y 1928-1930) y Juan Perón en el PJ, que rechazaron una y otra vez la concertación política con la oposición, situándose como únicos e indivisibles representantes de la Patria y el Pueblo.

A casi medio siglo de inestabilidad política, signada por reiterados golpes de Estado al orden constitucional, la mayoría de ellos legitimados por la propia sociedad, se produce un cambio importante en el sistema de partidos, con el retorno de la democracia, en 1983. En efecto, tras décadas de dictaduras militares e intentos fallidos contra el orden constitucional, comenzaría a evidenciarse a partir de entonces un mayor respeto hacia el sistema de partidos y el pluralismo democrático, tanto por parte del gobierno, como de la propia sociedad. En este contexto, el presidente electo, el dirigente radical Raúl Alfonsín, se propondrá respetar íntegramente el marco institucional y el Estado de derecho. Simultáneamente, el otro gran partido, el justicialismo,

llevará a cabo también una democratización de sus estructuras movimientistas, autonomizándose del sector de la “burocracia sindical” anteriormente dominante.⁴¹

Empero, las esperanzas durarán poco, porque el presidente, a diferencia del caso venezolano, no logrará subordinar el poder creciente de las corporaciones sindicales, militares y empresariales. Cada una de ellas a su modo, ya sea mediante paros constantes, como el caso del sindicalismo peronista, intentos de golpe de Estado, como en el caso de la corporación militar e incumplimiento de los acuerdos políticos y económicos, como en el caso de los grandes empresarios, jaquearán el poder presidencial, deslegitimando al mismo tiempo, al sistema de partidos, débilmente estructurado y al propio Estado, manipulado por los grupos de interés

En 1989, con el acceso al poder del justicialista Carlos Menem, la hegemonía continuaría presente, e incluso se extendería, a partir de la aplicación abusiva de decretos y vetos y la apelación a marcos jurídicos, delegados para sortear el Congreso, el cual será visto como una interferencia al poder del gobierno, para tomar las decisiones requeridas para reestructurar la economía y la sociedad heredada del gobierno anterior. La consecuencia de esta visión “delegativa” será una fuerte deslegitimación del Congreso y los partidos políticos que perderán su razón de ser, dada la arbitrariedad del Ejecutivismo del Presidente.

La lógica bipartidista en defensa de los principales lineamientos del programa neoliberal del gobierno de Menem, se mantendría sin atenuantes durante todo su primer mandato (1989-1995), concentrándose las críticas en el plano institucional. Incluso la UCR no dudará en votar a favor de la reelección presidencial, en lo que se conocería como el Pacto de Olivos, de diciembre de 1993. Este acuerdo firmado entre el presidente Menem y el ex presidente Alfonsín, que permitirá reformar la Constitución Nacional a cambio de cierta limitación del poder arbitrario del primer mandatario,⁴² será visto por parte de la sociedad como una concesión, al permitirle a Menem acceder a competir por un nuevo mandato. En ese contexto, el pacto terminará incrementando la lógica corporativa bipartidista y autorreferencial,⁴³ al tiempo que deslegitimará fuertemente al radicalismo.

Si hasta 1995, cuando Menem resultó reelecto con casi el 50% de los votos, la oposición se mantenía fragmentada, a partir de ese año, con el incremento de la crisis económica y social provocada por las políticas económicas neoliberales, se producirá una transformación en el viejo sistema bipartidista imperfecto. En agosto de 1997 la UCR se alió con el recientemente creado Frente del País Solidario (FREPASO), desprendimiento del Frente Grande -de tendencia centroizquierdista- para formar la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Esta coalición de carácter electoral y baja estructura partidista, fue constituida con el objetivo único de vencer al PJ en las elecciones nacionales, a realizarse dos años después. En efecto, las encuestas de entonces pregonaban una nueva victoria del oficialismo, esta vez de la mano del ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. En ese contexto, y frente a la posibilidad cierta de una nueva derrota electoral, la conformación de la Alianza resultaría exitosa. Finalmente, en las elecciones de octubre de 1999 el candidato del radicalismo, Fernando de la Rúa (1999-2001), acompañado por el frepasista Carlos “Chacho” Álvarez, terminó siendo electo como nuevo presidente con un porcentaje cercano al 50% de los votos, secundado por Eduardo Duhalde, quien obtuvo poco más del 38% de los sufragios.

Luego de dos años de mandato sin grandes cambios con respecto al gobierno de Menem (1989-1999), una combinación de crisis económica y política -que luego analizaremos con más profundidad- estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando una manifestación de sectores medios, se dirigió a la histórica Plaza de Mayo, exigiendo “Que se vayan todos”. Las protestas, similares al Caracazo de 1989 en Venezuela, tanto por sus componentes ideológicos de movilización social masiva frente a la “ineficacia decisional”⁴⁴ de los gobernantes, como por la presencia de saqueos a supermercados, significaron la renuncia del presidente y la disolución formal de la Alianza, obligada a renunciar frente a las protestas populares y la pérdida de respaldo de la oposición.⁴⁵

Esta crisis, la más grave de la historia contemporánea del país sudamericano, generaría también fuertes impactos sobre el sistema de partidos. Con la caída de la Alianza, dos sectores del radicalismo se separaron del partido centenario para constituir dos nuevos partidos. Por un lado, se formó el centroizquierdista, Alternativa para una República de Iguales (ARI), liderado por la dirigente Elisa Carrió, y, por el otro, el centroderechista Recrear, dirigido por el empresario neoliberal Ricardo López Murphy. El PJ, por su parte, también se dividió en tres sectores: un sector de centroizquierda, representado por el ex gobernador provincial, Néstor Kirchner, un sector de centro-derecha de características populistas, representado por el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá y un sector de derecha, liderado por el ex presidente Carlos Menem.

Luego del breve interinato de Eduardo Duhalde en 2002, al año siguiente el régimen político-institucional lograría normalizarse. Lejos de la crisis de representación de finales de 2001, que se vio acompañada por fuertes protestas sociales contra la “clase política” en su conjunto, en las elecciones que se llevaron a cabo en abril de 2003 resultó electo como presidente, el justicialista Néstor Kirchner, luego de que el vencedor en la primera vuelta, Carlos Menem, desistiera de participar en el ballotage frente a lo que iba a ser una apabullante derrota electoral.⁴⁶

En síntesis, en Argentina se pueden observar muchas similitudes con el caso venezolano. En ambos países el bipartidismo tradicional entró en crisis, y lo hizo por los mismos motivos. El primero de ellos se debió a una devastadora crisis económica, generada por el fracaso del modelo de acumulación de orientación neoliberal -modelo que más adelante analizaremos en detalle- y el segundo, por la existencia de una crisis político-institucional, producto del gobierno extremadamente corrupto de Menem y el continuismo, si bien en menor medida, de su sucesor, Fernando De la Rúa (1999-2001). Este dirigente, de extracción radical, había sido elegido como Presidente a través de una campaña fuertemente mediática de ataque a la corrupción, pero la decepción no tardó en llegar, cuando se descubrieron los intentos de pago de sobornos en el Senado a cambio de la aprobación de leyes impositivas exigidas por el FMI, lo que venía a demostrar que la corrupción de la época menemista no había terminado.⁴⁷

Al igual que en Venezuela, fueron estos dos elementos, los factores que nos permiten dar cuenta de la crisis en el régimen que estalló en el “Caracazo” argentino del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las críticas, expresadas en el lema “Que se vayan todos”, no eran sólo contra la corrupción de los políticos y la ineficacia de los partidos, sino que se extendían a toda la clase dirigente, incluyendo a sindicalistas y jueces de la Corte Suprema. En este último punto de crítica al Poder Judicial encontramos cierto parecido con el caso venezolano, pero en Venezuela se criticaba la

desigualdad del sistema judicial para garantizar igual tratamiento y pena a los funcionarios públicos en relación con las personas privadas, envueltas en escándalos administrativos. En Argentina, en cambio, se exigía la disolución de la Corte Suprema, vinculada a la corrupción menemista.

Había, otra diferencia entre los dos casos, puesto que en Venezuela AD y COPEI se aliaron para competir juntos en las elecciones presidenciales. En Argentina, en cambio, esa alianza entre los dos más grandes partidos, nunca se llevó a cabo. Ello se debió, en primer lugar, a la constitución de ambos movimientos históricos dominantes como representantes absolutos de la Nación, lo que los llevó a entender históricamente al adversario político, como a un enemigo a destruir, imposibilitando, de ese modo, la conformación de un sistema de partidos pluralista y eficaz. Asimismo, se debe a una segunda y crucial diferencia entre ambos países: mientras que en Venezuela, luego de una pequeña composición, la crisis del sistema de partidos se evidenció en el resquebrajamiento de los dos partidos hegemónicos tradicionales, especialmente Acción Democrática, que terminó dividiéndose en dos sectores; en Argentina, la crisis sólo afectó íntegramente a uno de ellos -la UCR- que, además de sufrir, como vimos, dos escisiones internas, tuvo en las elecciones presidenciales del 2003 el mínimo apoyo electoral en toda su historia -no llegó al 2% de los votos en todo el país.⁴⁸ El justicialismo, en cambio, si bien, se dividió en tres sectores internos, alcanzó un porcentaje total, si sumamos a los tres candidatos que se presentaron en aquellas elecciones, del 60% de los sufragios.⁴⁹ De este modo, se puso en evidencia que la crisis no lo había afectado en el grado que lo había hecho en el radicalismo y en los dos partidos venezolanos tradicionales.

A pesar de que tanto en Argentina como en Venezuela, la resolución de la crisis tomó senderos diferentes, hubo un nuevo punto en el que ambos países, al igual que el resto de los que componen la región, coincidieron: en el hecho de que la crisis se encauzó institucionalmente. En estos términos, se dio la paradoja en los partidos políticos de la región, de que pese a que se produjo un incremento de la debilidad de los mecanismos de representación y mediación política, a ese debilitamiento gubernamental le siguió una institucionalización e incluso consolidación del régimen democrático, tal como sostiene Morlino, la “crisis en la democracia” no se convirtió en tal, en el sentido que le da el autor de una crisis que terminara con el derrumbe del régimen democrático de gobierno.⁵⁰

Ello obedece a que las Fuerzas Armadas se encontraban muy desprestigiadas en aquellos países. En este sentido, al igual que lo analiza Morlino con el caso del fascismo en Italia, el recuerdo directo o transmitido a las nuevas generaciones de la experiencia dictatorial, habían puesto los cimientos de la irreversibilidad democrática. Además, los gobiernos democráticos suelen implementar políticas que favorecen a los sectores privilegiados, esto es, a los grandes empresarios, por lo que no dudan en apoyarlos abiertamente. Por otro lado, no hay probabilidad de que ganen elecciones nacionales, aquellos partidos resueltos a provocar cambios radicales en la sociedad capitalista. Con la caída del comunismo, a comienzos de la década de los años 90, el peligro “rojo” a la “seguridad nacional”, dejaría de estar en la agenda como prioridad. Por último, emprender una dictadura, tendría demasiadas presiones en el plano internacional y sería amenazada con la quita de ayuda económica y militar, lo que obviamente atenta contra su aplicación. Por lo tanto, el problema actual, no es la dicotomía democracia o dictadura, sino,

parafraseando nuevamente a Morlino, cuál democracia. En otras palabras, el régimen democrático ya no es puesto en discusión, sino que se cuestiona la calidad del mismo.⁵¹

Retomando el caso venezolano, el nuevo liderazgo surgido de la crisis del sistema de partidos, implicó el regreso al poder de un líder personalista como no había en ese país desde 1968. Un liderazgo que algunos caracterizan como “neopopulista”,⁵² en el sentido de “una particular relación, entre cierto tipo de liderazgo personalista y sectores sociales en disponibilidad para movilizarse o ser movilizados en contextos de crisis social, política y económica”. A diferencia de otros tipos de nacional-populismos, como el peronismo y el liderazgo de Betancourt, el chavismo se caracteriza por no poseer el apoyo masivo de los sindicatos, ligados históricamente a AD. Otra particularidad del “populismo” chapista, es su lógica confrontacionista, que, al igual que su discurso fuertemente nacionalista y antiimperialista, lo acerca a Betancourt y al primer peronismo.⁵³ Por otro lado, se parece también al peronismo en que tiene poco apoyo de las clases altas⁵⁴ y que los grandes propietarios de los medios de comunicación, siempre fueron deliberadamente opositores al Presidente.⁵⁵

En Argentina, a diferencia de Venezuela, vimos que los liderazgos de tipo personalista y hegemónico, no son un fenómeno reciente, sino que resultan de una larga tradición. Estos continuarán en gran medida durante el gobierno de Menem, surgido de la crisis hiperinflacionaria de 1989. En cuanto al liderazgo de Néstor Kirchner (2003-2007), luego reemplazado por el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, parece situarse en una lógica de confrontación política más moderada que el chavismo. Por otra parte, y a diferencia de aquel, tiene a su favor a la gran mayoría de los sindicatos –históricamente ligados a este partido- y a las más concentradas organizaciones sociales con eje en Buenos Aires, aunque parece compartir el desprecio de un sector importante de las clases altas y en menor medida, de sectores medios urbanos descontentos con el abuso de poder y la soberbia del gobierno.

El modelo de acumulación

Como dijimos al comienzo de este trabajo, ninguna crisis puede ser entendida sin tener en cuenta el aspecto económico. Aunque este no determina necesariamente los conflictos, tal como pretende el marxismo, no puede soslayarse su importancia crucial en la constitución conflictual de la sociedad. En el mismo sentido, el campo institucional, tal como lo entiende la politología norteamericana, resulta insuficiente para entender la genealogía de las complejas crisis nacionales, al limitar nuevamente el análisis a un aspecto unidimensional, aunque esta vez olvidando el aspecto económico. Veamos, entonces, para intentar trascender estos análisis reduccionistas, la importancia ejercida por la aplicación de lo que podemos denominar el modelo de acumulación.

Comenzando por el caso argentino, la llegada a la escena política del coronel Juan Domingo Perón, en 1943, y el posterior acceso a la presidencia, en 1946, significó en este país un drástico cambio en el modelo de acumulación vigente desde finales del siglo XIX. Desde 1880 hasta 1930, extendiéndose en gran medida hasta 1943, había prevalecido un modelo de acumulación centrado en el sector agroexportador de materias primas. Tras la crisis de la década de los años 30, y en mayor medida a partir de la llegada al poder del peronismo, se iniciaría, en cambio, un

nuevo modelo de acumulación que se ha denominado de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Durante sus dos períodos de gobierno, principalmente el primero (1946-1952), se llevó a cabo una integración de los sectores marginales mediante la provisión de amplios beneficios sociales a las masas históricamente excluidas. Estos beneficios fueron acompañados por un modelo de desarrollo popular-industrialista, ligado al mercado interno y caracterizado por una fuerte intervención estatal en el campo social.

Con el advenimiento de la dictadura militar (1976-1983), la “matriz estadocéntrica”,⁵⁶ comenzaría a debilitarse de manera progresiva y a ser reemplazada, paulatinamente, por un modelo de Estado mínimo, el mismo que continuaría expandiéndose, no sin contradicciones, durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín. Los dos grandes objetivos perseguidos por los representantes del establishment y los sectores castrenses en el golpe de Estado de marzo de 1976, consistía en reestructurar la economía para terminar con el “populismo estatizante”, vigente desde tres décadas atrás y ordenar a la sociedad para terminar con el desorden provocado por la “subversión marxista” y las excesivas demandas sociales de los sectores populares ligados al peronismo. En esta perspectiva se llevó a cabo a partir de 1976 una apertura de la economía, conjuntamente con una reforma financiera y una desregulación y privatización parcial que logrará transformar de manera drástica el modelo distributivo y homogeneizador del período anterior, reemplazado por un nuevo modelo de acumulación ligado a la valorización financiera y los grandes grupos de poder empresarial.

Desde 1983 a 1989, estas reformas neoliberales, constituyeron un período neo-keynesiano, pues continuaron su marcha a través de los intentos de privatizar algunas empresas públicas, reducir el gasto público y los aranceles. Chocarán, sin embargo, con la negativa de la oposición sindical, peronista y de algunos empresarios, principalmente los contratistas y proveedores ligados a los subsidios y sobreprecios estatales.⁵⁷

Con la creciente crisis económica, que llevará los índices de inflación a niveles nunca antes vistos en la historia, y los crecientes déficits fiscales del Estado, las reformas neoliberales ganarán más adeptos en todos los sectores sociales. En ese contexto, a partir del acceso a la presidencia del justicialista Carlos Menem, en julio de 1989, las políticas neoliberales promovidas por el FMI y los Estados Unidos, se implementarán de manera más consistente y decidida. En especial será a partir de 1991, con la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad, que igualaría la moneda nacional 1 a 1 con el dólar,⁵⁸ cuando estas medidas llegaron a su máxima expresión. A partir de entonces, luego de dos intentos fallidos de estabilizar la economía, se comenzarían a aplicar con mayor determinación, un conjunto de reformas estructurales que contrastarán fuertemente con la tradición distributiva y benefactora del peronismo. Así, en esos años se llevará a cabo un proceso de privatización y concesión de casi la totalidad de las empresas públicas, se abrirá el comercio y el sector financiero al gran capital transnacional y se desregulará la economía mediante inéditas políticas de flexibilización que transformarán de manera profunda la estructura social homogénea e igualitaria que caracterizaba al peronismo.

Las consecuencias de la aplicación de estas políticas neoliberales, que afectaron en mayor medida a los trabajadores asalariados que históricamente habían sido la base de apoyo al peronismo, serán un incremento de la pobreza, la desigualdad y la desocupación, además de un crecimiento

inusitado de la deuda externa y de los desequilibrios comerciales y fiscales, si bien, quedará como saldo positivo el control de la inflación.⁵⁹ Pero la crisis, potenciada por el Efecto Tequila, que devaluó la moneda mexicana en diciembre de 1994, temiéndose el mismo resultado para el país sudamericano en razón de la volatilidad de los capitales especulativos,⁶⁰ no era sólo económica sino también, como vimos anteriormente, política, producto de décadas de corrupción e impunidad del sistema político.

Pero, no fueron los casos de corrupción, los que generaron el problema a gran escala –envista de que los intentos de sobornos en el Senado, a mediados del año 2000, no provocaron protestas sociales inmediatas- sino la confiscación de los depósitos y el límite semanal de \$250 que se podía extraer de los bancos, medida adoptada por el gobierno del radical Fernando De la Rúa a comienzos de diciembre de 2001 para prevenir una corrida bancaria, restringir la huida de capital y salvar así, la permanencia de la Convertibilidad. De tal manera que la incipiente fuga de depósitos obligó al Estado a imponer una limitación bancaria para evitar la devaluación de la moneda.

Luego de la renuncia anticipada de De la Rúa, la Asamblea Legislativa eligió en su reemplazo, previo paso de otros tres presidentes fugaces, al justicialista Eduardo Duhalde, quien, en su primera medida, el 1 de enero de 2002, puso fin formalmente a diez años de vigencia de la Convertibilidad, devaluando la (sobreevaluada) moneda nacional.

En abril de 2003 se realizaron las primeras elecciones presidenciales post-crisis. El resultado, mostró que poco quedaba de las exigencias de que se fueran todos los políticos, debido a que, en la primera vuelta, resultó vencedor el ex presidente Menem, aunque luego desistió de presentarse al ballottage, por lo que resultó electo el también peronista Néstor Kirchner, de tendencia más moderada. De esta manera, al igual que lo haría en Venezuela y en el resto de los países de Latinoamérica, la crisis se encauzaba por la vía democrática.

En Venezuela, al igual que en el caso argentino, el núcleo central del sistema reformista y modernizador”, inaugurado por el dirigente Rómulo Betancourt, centró el eje de orientación de su gobierno alrededor de una alianza política y social con el sindicalismo y los sectores asalariados de origen industrial emergentes del proceso de industrialización. Aunque el grado de estratificación de los “clivajes populistas” en los sectores trabajadores venezolanos fue mucho menor al argentino,⁶¹ donde el Estado se alió íntegramente con los sindicatos, al punto tal de incluirlos dentro de su estructura, constituyéndose una relación entre el Estado y las masas asalariadas y campesinas, el “pueblo”, en detrimento de las elites tradicionales conservadoras que dominaban previamente la escena política.

Este Estado, fuertemente intervencionista, sin embargo, se diferenciaba del peronista al centrarse íntegramente en el desarrollo y producción petrolera. A diferencia de Argentina, cuyas ventajas naturales se centraban en sus fértiles tierras y recién a partir de mediados del siglo XX inició un desarrollo general y planificado de la industria nacional, desarrollo que a partir de 1976 retomará su marcha descendente hacia un modelo desindustrializador con eje en el sector financiero, en Venezuela las divisas provinieron históricamente y en gran cantidad⁶² de la exportación petrolera, continuando su expansión productiva a lo largo de diferentes períodos históricos, entre ellos, el

gobierno militar del período 1948-1958. Aunque durante el gobierno dictatorial del General Marcos Pérez Jiménez, se produjeron algunos cambios macroeconómicos, que incentivan un auge del sector de la construcción y del sector financiero, otorgando concesiones petroleras a empresas extranjeras, se produjo, al mismo tiempo, una notable expansión del sector ligado a la industria petroquímica.

Esta notable expansión de la explotación petrolera no resultó menor. En efecto, la misma permitirá cubrir los déficits fiscales producidos por el sector financiero y las remesas de las firmas extranjeras a partir del ingreso masivo de los recursos en divisas que ingresaron a las arcas del Estado. En ese contexto, a diferencia de casos como el modelo desarrollista aplicado en Argentina en los años 50 y 60, cuyas divisas desde el sector agroexportador eran escasas, generando crecientes déficits fiscales cubiertos mediante devaluaciones recurrentes y, a partir de 1976, mediante el mecanismo del endeudamiento externo, en la Venezuela de los años '40 y '50 no existían estos problemas fiscales irresueltos, permitiendo al Estado desarrollar una amplia diversificación de la estructura productiva nacional.

Con el retorno de la democracia, nuevamente con Betancourt como presidente electo de manera democrática, se llevará a cabo, el Pacto de Punto Fijo y las bases Programáticas Provisorias para alcanzar un acuerdo bipartidista mínimo. Este último acuerdo fijará no sólo la existencia de derechos individuales, lo que lo diferenciará del caso argentino, sino también, el respeto a los derechos sociales y la justicia social. En ese contexto, el Estado garantizará el control total de los recursos naturales. Específicamente, protegerá mediante diferentes organismos estatales a las industrias clave del petróleo y el hierro y controlará a las inversiones extranjeras, favoreciendo mediante subsidios estatales a las que “contribuyan al desarrollo económico de la Nación”.⁶³

Unos años después, en 1976, se dará marcha atrás con la apertura al capital transnacional, típica del modelo desarrollista, a partir de la nacionalización en 1976 de la principal empresa petrolera del país, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). No obstante, en 1983 se volverá a incentivar el ingreso de inversiones externas en el sector, aunque limitada a “campos marginales”. Para entonces, el gran factor de desarrollo nacional entraría en una etapa de franca decadencia, lo que se expresará en una declinación de los saldos exportables y de la eficiencia en la productividad del sector, desde finales de la década de los 80, con el declinamiento de los altos precios mundiales del petróleo, el incremento constante del déficit fiscal y sobre todo la creciente tasa de inflación, sin embargo, en Venezuela no llegaría, al extremo hiperinflacionario que se viviría trágicamente en países como Argentina, cuyas corporaciones políticas serán mucho más poderosas que en el país andino para defender sus demandas corporativas, sería campo propicio para la aplicación de políticas neoliberales de ajuste, promovidas por los organismos multilaterales de crédito (especialmente el FMI y el Banco Mundial).

Si bien, la aplicación de estas políticas ortodoxas no llegaría al extremo inédito que se observó durante la década de los noventa en el país sudamericano, lo que se pone en evidencia, es el hecho de que el petróleo permaneciera en manos del Estado, mientras que durante el gobierno de Menem será privatizado junto con la mayoría de las empresas públicas,⁶⁴ la implementación de medidas neoliberales en Venezuela provocó, al igual que en Argentina y en el resto de la región, una crisis económica de considerables proporciones.

El proceso nos remite en primer término al llamado “Viernes Negro”, el 18 de febrero de 1983, cuando la moneda de curso legal, el Bolívar, colapsó brutalmente, iniciando un período de creciente inflación y declinamiento económico, sin embargo, no llegará al extremo incontrolable del caso argentino.⁶⁵ Un segundo momento crítico se produjo en septiembre de 1987, cuando el presidente Jaime Lusinchi lanzó un plan de ajuste y austeridad que no logró controlar la inflación ni el aumento de la tasa de desempleo. Pero la crisis económica estallaría en toda su magnitud con el sangriento y traumático levantamiento popular del 27 de febrero de 1989, en respuesta al Plan de ajuste del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993). La ciudadanía se sintió fuertemente decepcionada con las medidas tomadas por Pérez, quien, mientras en su primera presidencia había llevado a cabo una política desarrollista de fuerte intervención estatal, en su nuevo mandato viró repentinamente hacia el neoliberalismo, implementando un aumento en los precios de los transportes, los servicios públicos y otros bienes, no acompañados por una adecuación en los índices salariales, lo que terminó por provocar la explosión popular.

Al igual que en Argentina, en la movilización se produjeron saqueos de supermercados y numerosos destrozos, siendo la respuesta del gobierno una brutal represión -aunque en Venezuela fueron más de cien muertos y en Argentina veinticinco- Pese a las semejanzas con la movilización de diciembre de 2001 contra el gobierno de De la Rúa, hubo una diferencia, en el sentido de que en Venezuela los principales actores de la protesta fueron las clases marginales y obreras y, en menor medida, la clase media-baja. En el caso argentino, en cambio, fue una movilización básicamente de la clase media y sectores minoritarios de las clases populares.

A pesar de la reacción popular, las políticas neoclásicas de privatización, desregulación y apertura, continuaron aplicándose contradictoriamente en el país andino, trayendo como consecuencia que en 1992 un grupo de mandos medios de las Fuerzas Armadas se rebelara exigiendo la corrección de la orientación adoptada y una lucha más enérgica contra la corrupción, con lo que obtuvo el apoyo de sectores populares y estudiantiles. Durante esta crisis, se dio el marco propicio para el triunfo del liderazgo de Hugo Chávez Frías, quien accedería al poder acompañado por un discurso netamente antipartidos, consecuencia directa de la crisis de representación política-institucional, y de raíz populista-nacionalista con fuertes críticas al neoliberalismo, respuesta inmediata a la crisis del modelo intervencionista estatal y los resultados adversos provocados por la aplicación de las reformas de mercado.

Una vez en el poder, el líder venezolano lleva el eje de atención a la recuperación de la producción y los saldos exportables del sector petrolero diezmados por los gobiernos precedentes, logrando importantes logros en esta materia. Abrirá parcialmente la empresa petrolera estatal a la inversión extranjera, pero adoptará al mismo tiempo una política de creciente incentivo al desarrollo del empresariado nacional, con el objeto de ampliar el suministro de bienes y servicios para la industria derivada del sector petrolero y una fuerte política social ligada a cooperativas y microcréditos a pequeñas y medianas empresas productivas con el objeto de reducir los índices de pobreza, desempleo y subempleo. Finalmente, al igual que en Argentina, se ha incrementado el gasto social en salud y educación con el objeto de reducir las diferencias de ingresos entre los distintos sectores sociales, si bien con resultados algo modestos.

Si comparamos brevemente a este nuevo liderazgo emergente en Venezuela con el surgido en Argentina a partir del ascenso de Néstor Kirchner, notamos importantes coincidencias. Ambos accedieron al poder en medio de una fuerte crisis de legitimidad de la política y las instituciones representativas. En el caso argentino, el Presidente provendrá de uno de los partidos tradicionales, el justicialismo, acentuando la hegemonía de aquel partido; mientras que Chávez formará uno nuevo, mostrando la descomposición total del tradicional bipartidismo AD-COPEI. Del mismo modo, ambos serán una consecuencia directa del fracaso del modelo de acumulación de orientación neoliberal, compartiendo entre sí, junto con la recientemente electa Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, una fuerte crítica, al menos desde el ámbito discursivo, contra las políticas ortodoxas del modelo anterior. En ese contexto, el liderazgo chavista parece ser más extremo, aunque no menos contradictorio.⁶⁶

Consideraciones finales

Nos propusimos realizar un análisis histórico-comparativo de la crisis post-transiciones de Venezuela y Argentina. Diferenciándonos del enfoque neo-institucionalista dominante en la Ciencia Política, intentamos trascender este tipo de análisis reduccionista y normativo, centrado en el aspecto político-institucional, para incorporar también el análisis del modelo de acumulación vigente. En ambos casos pudimos observar, con ciertas especificidades que los diferenciaban entre sí, que la crisis post-transición a la democracia resultó de la conjunción de un sistema de partidos que ingresó en una crisis terminal, producto de la creciente corrupción e impunidad del sistema político y, en particular, de la aplicación de un conjunto de políticas económicas neoliberales que generó graves consecuencias económicas y sociales. En los dos países observamos en la actualidad, al igual que en países como Bolivia y Ecuador, pero también en Chile y Brasil, liderazgos que han surgido como consecuencia de esta crisis política, económica y social que reconfiguró profundamente la relación entre el Estado y la Sociedad Civil.

Hugo Chávez en Venezuela y Néstor Kirchner y recientemente Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, al igual que Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, parecen estar marcando un camino alternativo, en particular en lo que refiere a las políticas hegemónicas neoliberales de las últimas tres décadas. Aún es temprano para sacar conclusiones al respecto. Lo que sí podemos afirmar sin duda alguna, es que, en los casos estudiados, ambos liderazgos representan una consecuencia ineludible del proceso histórico de ruptura del sistema político y del modelo económico inmediatamente anterior y, por lo tanto, su surgimiento y desempeño posterior no hubieran sido posibles sin la crisis precedente.

Notas y bibliohemerografía

¹ Véase: O'Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe y Whitehead, Laurence, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, 1991, Bs. As.

² Véase: Linz, Juan, "Democracia: Presidencialismo o parlamentarismo, ¿Hace alguna diferencia?", en O. Godoy, Arcaya (edit.), *Hacia una democracia moderna. La opción parlamentaria*, Universidad Católica de Chile, Santiago: 1990.

³ Véase: O'Donnell, "Otra institucionalización", *Ágora*, Año 3, N° 5, Bs. As., 1996.

⁴ Estas medidas también fueron conocidas a partir de 1990 con el nombre de Consenso de Washington y se basaban en la aplicación de ajustes y reformas estructurales (privatización, desregulación, apertura comercial y financiera, reducción del gasto público y equilibrio fiscal) con el objeto implícito de obtener fondos para cobrar los préstamos adeudados.

⁵ Véase: Mettenheim, Kurt Von, "Presidencialismo, democracia y gobernabilidad en Brasil", en J. Lánzaró (Comp.). "Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina", CLACSO, Bs. As. 2001.

⁶ Cabe aclarar que la distinción realizada entre política y economía, a diferencia de lo que sostiene la corriente neo-institucionalista, es puramente formal y analítica, ya que ambos campos se entremezclan entre sí mediante una recíproca dependencia.

⁷ Collier, David, "El método comparativo: dos décadas de cambios", en G. Sartori y L. Morlino (comps.), Madrid: Alianza, 2002. p. 51.

⁸ Véase: *Ibíd.*

⁹ Debemos considerar que ya se había creado previamente el Partido Comunista Venezolano (PCV), luego diezmado a partir de la organización producida en los años 40.

¹⁰ Reemplazante del Partido Demócrata Nacional (PDN), fundado en 1936.

¹¹ La estructuración partidista, se inicia en realidad en 1936, con el llamado "Plan de Barranquilla", para luego ser profundizado en 1938, con los planteamientos del Partido Democrático Nacional (PDN), el cual contaba con Rómulo Betancourt, como uno de sus ideólogos. En el Plan de Barranquilla, se hacían proclamas a la unidad nacional, a la disciplina social, a la apelación al "proteccionismo" y la defensa de las "masas populares" frente a la oligarquía terrateniente y las injusticias sociales reinantes. Finalmente, el discurso atacaba el "materialismo" y la "corrupción moral", que "han deprimido nuestra vida colectiva". En cuanto al segundo programa, continuaba las críticas al régimen de propiedad agrario "semifeudal" y al "imperialismo", incorporando una fuerte defensa del sector agroindustrial nacional. Véase: Aznar, Luis, "Las transiciones desde el autoritarismo en Venezuela. El proyecto de Acción Democrática y sus efectos sobre el sistema sociopolítico", *Desarrollo Económico*, Vol. 30, N° 117, 1990. p. 59.

¹² Véase: Di Tella, Torcuato, *Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX*, Fondo de Cultura Económica, Bs. As. 1993, pp. 344-345.

¹³ Véase: Aznar, *Op.cit.* p. 56.

¹⁴ Empero, y al igual que en Argentina, el comunismo fue marginado como actor político y perseguido por el gobierno de turno, en razón de su "inadecuación a las características estructurales de la sociedad venezolana".

¹⁵ Véase: Kornblith, Miriam y Levine, Daniel H., "The life of the party system", en S. Mainwering y T. Scully (comps.), *Building Democratic Institutions: Party systems in Latin America*, California: Stanford University Press, 1995.

¹⁶ Véase: Aznar, *Op.cit.*

¹⁷ Véase: Botana, Natalio, *El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916*, Sudamericana, Bs. As. 1998.

¹⁸ Se refiere a la protesta contra el régimen oligárquico conservador llevado a cabo por un grupo de dirigentes que luego formarían la UCR, entre ellos su fundador, Leandro N.

¹⁹ En realidad, Perón había creado previamente el Partido Laborista, como una copia del modelo del laborismo inglés. pero, frente a la amenaza de que algunos sectores se independizaran del líder, el partido

fue disuelto y en su lugar se formó un partido verticalista de carácter movimientista, que tomó el nombre de partido peronista.

²⁰ Véase: Aznar, Op.cit.

²¹ El rasgo movimientista del peronismo quedó definido en el artículo 80 de la Carta Orgánica. Allí se señalaba que “El Partido Peronista es una de las partes que forman el Movimiento Peronista. Las otras partes son: el Partido Peronista Femenino y la Confederación General del Trabajo (CGT)” (citado en: Mustapic, Ana María, “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922”, *Desarrollo Económico*, Vol. 94, N°23 (abr-jun), 1984, p. 143.

²² Véase: Di Tella, Op.cit.

²³ Luego tendría una nueva experiencia como presidente, entre 1959 y 1964, sumando un total de siete años en el poder.

²⁴ Kornblith y Levine, Op.cit. pp. 37-38.

²⁵ Véase: Aznar, Op.cit. p. 83

²⁶ Véase: Kornblith y Levine, Op.cit. p. 45.

²⁷ Véase: Kornblith y Levine, Op.cit. pp. 46-47.

²⁸ Véase: Kornblith y Levine, Op.cit. p. 50.

²⁹ Este fenómeno de “americanización”, en realidad, constituye un caso extendido al ámbito mundial.

Véanse Novaro, Marcos, *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*, Homo Sapiens, Bs. As. 2000 y Alcántara Sáez, Manuel, “La organización de los partidos latinoamericanos”, en M. Alcántara Sáez, *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*, Barcelona, ICPS, 2004.

³⁰ En la elección presidencial de 1973 AD y COPEI sumarán en conjunto un 85,4% de los votos; en 1978, un 89,9%; en 1983, un 91,5% y en 1988 llegarán al récord de 92,9%. Datos estadísticos extraídos de Kornblith y Levine, Op.cit. tabla 2.6.

³¹ Entre 1974 y 1988 fueron electos: Carlos Andrés Pérez (1974-1978) de AD, Luis Herrera Campins (1979-1983) de COPEI y Jaime Lusinchi (1984-1988) de AD. Véase: Aznar, Op.cit. p. 82.

³² Carl Schmitt sostenía que la lógica que caracteriza a la política, era la distinción tajante entre amigos y enemigos. Véase Schmitt, Carl, *El concepto de lo político*, Madrid: Alianza, 1987.

³³ Véase: De Riz, Liliana, “Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay”, *Desarrollo Económico*, Vol. 25, N° 100, 1986.

³⁴ Véase: Lozano, Claudio y Feletti, Roberto, “La economía del menemismo. Cambio estructural., crisis recurrentes y destino incierto”, en AA.VV., *El Menemato. Radiografía de dos años de gobierno de Carlos Menem*, Letra Buena, Bs. As., 1991.

³⁵ O'Donnell, Guillermo, “¿Democracia delegativa?”, *Cuadernos del CLAHE*, N° 61, Montevideo, 1992.

³⁶ El golpe de Estado de 1955, que terminaría con el segundo gobierno de Perón, proscribió al peronismo como partido político, tal como lo había hecho la dictadura venezolana de 1948 con AD. Además, entre 1930 y 1943, con la excepción de un breve período de democracia, el radicalismo se refugiará en la abstención electoral frente a la continuidad de las prácticas fraudulentas de la dictadura militar.

³⁷ Para entender el colapso del bipartidismo, debemos tener en cuenta, la particular estructura del sistema electoral de Venezuela y sobre todo, la reforma llevada a cabo en 1989, que modificó el sistema proporcional con listas cerradas para la elección de la Cámara de Diputados. Esta reforma impidió la concentración de la selección de candidatos y todas las decisiones importantes en las manos de las elites del partido nacional, aumentando el control ciudadano sobre las dinámicas internas de los partidos y sobre el comportamiento de los funcionarios elegidos. Al mismo tiempo, le permitió a la ciudadanía, por primera vez en su historia, la elección directa de los gobernadores (antes elegidos por el Presidente). El resultado de ello sería la derrota de los partidos políticos tradicionales, en tanto el Movimiento al Socialismo (MAS), ganó en el estado Aragua y Causa R, otro partido minoritario, lo hizo en Bolívar, contribuyendo a la erosión del bipartidismo clásico. Véase Kornblith y Levine, Op.cit. pp. 58-69.

³⁸ Véase: Pérez Liñán, Adolfo, “Argentina y el nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina”, *SAAP*, Vol. 1, N° 1, 2002. p. 180.

³⁹ Véase: Aznar, Luis, “El orden político en la Venezuela de fin de siglo: de la ineficacia decisional al neopopulismo”, *POSTdata*, N° 5, 1999.

⁴⁰ Véase: Valenzuela, Arturo, “Latin American Presidencies interrupted”, *Journal of democracy*, Vol. 15, N° 4, 2004. p.11.

⁴¹ Véase: Palermo, Vicente y Novaro, Marcos, *Política y poder en el gobierno de Menem*, Norma-FLACSO, Bs. As, 1996.

⁴² Como medidas principales, la reforma planteaba, además de la posibilidad de reelección presidencial, la formación de una Comisión asesora de los decretos y vetos presidenciales, la creación de la figura del Jefe de Gabinete y la creación de un tercer Senador nacional por provincia.

⁴³ Véase: Pucciarelli, Alfredo, *La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la Argentina actual*, Libros del Rojas, Bs. As. 2002.

⁴⁴ Véase: Morlino, Leonardo, “¿Cuál es la crisis democrática de Italia?”, *Crítica y Utopía* N° 13, Bs. As., 1985.

⁴⁵ Debido a la crisis política, económica y social de diciembre de 2001, el gobierno perderá también el apoyo de la oposición peronista en el Congreso y sus gobernadores, quedando prácticamente con nula legitimidad política para continuar en el poder. Véase Pérez Liñán, Op.cit.

⁴⁶ Las encuestas le otorgaban al ex Presidente un porcentaje de votos que no lograba sobrepasar el 25% del total. Por ello, Menem se “bajaría” de la segunda vuelta, al entender que sería un desprestigio político mayor presentarse y ser derrotado por su rival de manera estrepitosa. Al mismo tiempo, conservaba la estirpe que lo mantenía invicto en elecciones legislativas y nacionales, al tiempo que deslegitimaba fuertemente a quien asumiría en su lugar.

⁴⁷ A mediados de 2001, se produjo una denuncia sobre el pago de sobornos en el Senado para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Poco después, un Senador “arrepentido”, de nombre Emilio Cantarero, aceptará que se había efectuado el pago de sobornos para aprobar la ley en el Congreso, generando una fuerte crisis política en el gabinete que terminará con la renuncia del vicepresidente, “Chacho” Álvarez, en octubre de ese año. Véase: Charosky, Hernán, “Honestos y audaces: realizaciones y límites de la política anticorrupción”, en AA.VV., *El derrumbe político en el ocaso de la Convertibilidad*, Norma, Bs. As. 2002.

⁴⁸ En todo caso, habría que relativizar en parte esta afirmación, ya que la UCR logrará obtener la victoria en algunas gobernaciones y varias intendencias provinciales.

⁴⁹ Cada uno de estos sectores, compitió en las elecciones presidenciales con el lema del partido justicialista, aunque a partir de listas diferentes. Este sistema, conocido como “Ley de Lemas”, permite postular a varios candidatos del mismo partido en forma simultánea, resultando electo el candidato más votado dentro del partido que hubiere conseguido una mayor cantidad de votos. Véase: Pérez Liñán, Op.cit. p. 172.

⁵⁰ Véase: Morlino, Op.cit.

⁵¹ En el caso argentino debemos agregar, el desprestigio militar, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, los indultos otorgados por el gobierno de Menem a los jefes militares sublevados en la llamada “guerra sucia”, el desmantelamiento de sus propiedades y disminución de sus presupuestos y la nueva misión castrense ligada a la consecución de la paz mediante el envío de misiones de paz a las zonas de conflicto internacional (Golfo Pérsico, Irak, Croacia).

⁵² Véase: Zermeño, Sergio, “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, *Revista Mexicana de Sociología*, N° 51, México, 1989.

⁵³ El primer gobierno peronista se caracterizaba por una fuerte lógica confrontativa Patria-AntiPatria, que incluía dentro de estos sectores, a todos los opositores a Perón. A su regreso al poder, en 1973, su discurso adquirirá, sin embargo, una lógica de integración de clases.

⁵⁴ Esto se ha transformado a partir del acceso al poder de Carlos Menem, quien logró el apoyo de una amplia coalición que incluyó desde trabajadores hasta grandes empresarios.

⁵⁵ Estos sectores fueron unos de los máximos promotores del intento fallido de golpe militar de 2006, contra el presidente Hugo Chávez.

⁵⁶ Véase: Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1996)*. La transición del Estado al mercado en la Argentina, Ariel, Bs. As., 1997.

⁵⁷ Aunque durante el período 1983-1985, que algunos autores extienden hasta 1987, las políticas de reforma estatal serán mínimas, a partir de ese año y más aún desde 1988, se profundizarán las políticas de reforma de mercado, tales como los intentos fallidos de privatización de la aerolínea estatal y la petrolera nacional y de apertura comercial.

⁵⁸ La llamada Ley de Convertibilidad estableció una paridad cambiaria 1 a 1 de la moneda nacional, el peso, y el dólar estadounidense a partir del 1 de abril de 1991. Al mismo tiempo, su implementación fue acompañada de un incremento de las políticas neoliberales de apertura, desregulación y privatización de empresas públicas. Ello no impidió, sin embargo, la aplicación de políticas muy poco “neoliberales”, tales como la protección a la industria automotriz y electrónica con regímenes especiales, la fijación de la paridad cambiaria por parte del Estado, la reducción de las tasas de interés para incentivar el consumo interno y el incremento del gasto público.

⁵⁹ La inflación que había alcanzado más del 1.000% en 1990, lograría reducirse fuertemente hasta llegar a la cifra de 0% en 1995, para luego llegar incluso a una deflación debido a los efectos recesivos generados por las políticas de libre mercado.

⁶⁰ A diferencia de casos como el de Chile, Argentina no controló los capitales especulativos o “golondrina”, siendo fuertemente dependiente de su permanencia en el país para mantener la paridad cambiaria y poder evitar la devaluación de la moneda.

⁶¹ Véase: Roberts, Keneth, “El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana”, en M. Cavarozzi y J. M. 2002, pp. 62-63.

⁶² Según datos de Aznar, el petróleo constituía el 45% de los ingresos totales del Estado en 1944 y llegaba al 60% en 1958.

⁶³ Aznar, *Op.cit.* p. 77.

⁶⁴ En septiembre de 1993 Menem privatizó la empresa petrolera YPF, lo que será un caso único en el mundo.

⁶⁵ Las tasas de inflación llegarán a un porcentaje máximo de 99,9% durante el período 1970 y 1998, muy lejos, sin embargo, del récord argentino de 3.079,8% de 1989. Por otro lado, el país andino no tendrá ningún año con tasas mayores al 100%, mientras que Argentina tendrá nada menos que 16 años de inflación superior a esa cifra entre 1970 y 1998. En realidad, desde 1991, las tasas de inflación serán menores al dígito, lográndose la estabilización definitiva de la economía a partir de la aplicación del Plan de Convertibilidad.

⁶⁶ Al igual que Chávez, que critica a Estados Unidos, mientras le compra petróleo y defiende el nacionalismo económico mientras abriendo la economía al capital transnacional, Cristina ha sido hasta el momento bastante contradictoria en cuanto a sus políticas económicas. Debe reconocerse su impronta industrialista y el sesgo exportador de su modelo de acumulación, lo que le permitió reducir los índices de pobreza y desocupación y lograr un fuerte crecimiento económico. Su antecesor, ha pagado en su conjunto la deuda al FMI, pues logró superávits gemelos en el plano fiscal y comercial, pero no pudo reducir la desigualdad social. En los últimos meses han surgido, nuevos conflictos económicos, como la imposibilidad de controlar la creciente tasa de inflación y el reciente conflicto con el campo (sin solución definitiva en el momento de entregar este artículo, en junio de 2008) por el tema de las retenciones a la exportación agropecuaria. En cuanto al modelo chavista, a pesar de sus evidentes logros en materia económica y social, que lo diferencian netamente de períodos anteriores, algunos autores señalan que en

los últimos años se han cerrado varias empresas pequeñas y medianas y se ha incrementado el proceso de desindustrialización iniciado dos décadas atrás, del mismo modo, que la fuga de capitales al exterior.